

SENTENCIA N-002-98, Tribunal Aduanero Nacional, San José, a las once horas con diecisiete minutos del día siete de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Mario Urbina Salazar, Vicepresidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la sociedad Almacén de Depósito Fiscal Cariari S.A., contra resolución DCF-253-97 del día diecisiete de setiembre de 1997, emitida por el Lic. Gerardo Bolaños Alvarado en su condición de Director General de Aduanas.

#### RESULTANDO

I. El recurrente fundamenta sus recursos y pretensiones en : a) La valoración de los hechos no corresponde a la realidad.; b) La colocación de la mercancía en bodega número cuatro fue producto de un error del transportista; c) En caso de considerar alguna conducta a sancionar solicita la aplicación del numeral 236 inciso d) de la Ley General de Aduanas en adelante L.G.A.; d) De conformidad con el 233 del mismo cuerpo normativo solicita se rebaje la sanción en un setenta y cinco por ciento; e) Solicita revocar la resolución impugnada y se ordene el archivo de los antecedentes.

II. La Administración mediante resolución número RES-DCF-253-97 de las ocho horas con treinta minutos del día diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y siete, resuelve imponer cinco días hábiles de suspensión al recurrente y advierte al sancionado que durante el plazo de la suspensión, no podrá iniciar operaciones nuevas, sino solo concluir las iniciadas anteriormente. Con resolución número RES-DCF-292-97 señala: "...el recurrente no aporta nuevos elementos probatorios que demuestren variación en las circunstancias que justifique la reconsideración, así como, los argumentos presentados en el escrito son reiterativos de los presentados en escrito de fecha 16 de junio de 1997, que contesta la resolución número DCF-056-97 de las diez horas del catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete que dio inicio al procedimiento ordinario objeto de las presentes diligencias, lo procedente es ratificar en todos los extremos la resolución DCF-253-97...".

III. En las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso de apelación.

Redacta el Licenciado Soto Sequeira; y,

#### CONSIDERANDO

I.- **Hechos probados:** Se tiene por demostrado en lo relevante al caso lo siguiente: a) El día 17 de febrero de 1997 la División de Control y Fiscalización realizó visita de inspección en las instalaciones del Almacén de Depósito Fiscal Cariari S.A. cédula jurídica número 3-101-033514 confeccionando acta de inspección ( folios 8 y 9 del expediente administrativo); b) Como resultado de la inspección la Administración constató que las mercancías amparadas a las declaraciones de tránsito números 510, 511 y 512 autorizadas por la Aduana de Limón con destino a la Aduana Santamaría, estaban depositadas en la bodega número cuatro destinada a Almacén General de Depósito.( folio 54 del exp. adm.); c) La División de Control y Fiscalización inicia procedimiento sancionatorio contra el Almacén de Depósito Fiscal Cariari S.A. con fundamento en los numerales 196 y 238 inciso c) de la L.G.A. (folios 51 y 52 del exp. adm.) d); El interesado se opone a la sanción mediante escrito sin número de fecha 20 de junio de 1997 ( folios 54 al 57 del exp. adm.); e) La Dirección General de Aduanas con resolución número RES-DCF-253-97 decide imponer cinco días de suspensión al recurrente ( folios del 64 al 72 exp. adm.); f) El interesado interpone los recursos de reconsideración y de apelación el día 29 de setiembre del año 1997( folios 73, 74, 75 y 76 del exp. adm.) ; g) La Administración con nota número DCF-1010-98 remite el expediente al Tribunal Aduanero Nacional y emplaza a la parte.( folio 81 exp. adm.).

II.- **Hechos no probados:** Para el dictado de la presente resolución no se observan hechos relevantes al caso que se tengan por no demostrados.

III.- **Cuestiones de fondo:** a). Las competencias del Tribunal Aduanero Nacional se encuentran prescritas en el título IX, capítulo único de la L.G.A; los recursos contra los actos dictados por la Dirección General de Aduanas se regulan en los numerales 203 y 204 de la ley antes citada. La materia que trata el presente asunto refiere al ejercicio de funciones aduaneras por parte del auxiliar de la función pública denominado Depositario Aduanero. Las principales normas que lo regulan son los artículos 46, 47, 48 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II y 46, 47, 48, 155 a 160 de la L.G.A. y los numerales 274 a 278, 289 al 300 del DE-25270-H Reglamento a la Ley General de Aduanas. En la citada normativa se señalan

los requisitos y obligaciones que adquiere una persona física o jurídica en su condición de depositario aduanero. Entre algunas obligaciones se señalan: “contar con instalaciones adecuadas para realizar operaciones de recepción, depósito, inspección y despacho de mercancías, con un área mínima de diez mil metros cuadrados, destinada a la actividad de depósito aduanero de mercancías, que incluya una sección mínima de construcción de mil metros cuadrados.”( artículo 47 de la L.G.A.).

Para comprobar el cumplimiento de este requisito, se agregan al expediente de autorización, las certificaciones sobre el inmueble donde se encuentran las instalaciones, y los planos visados de las mismas. Cuando los depositarios aduaneros poseen además la concesión de Almacén General de Depósito, deben mantener bodegas separadas para esa actividad.

Por las manifestaciones del representante legal del Deposito Fiscal Cariari S.A., que constan en el folio setenta y cinco del expediente y el contenido del acta de inspección de fecha 17 de febrero del año 1997, se puede concluir que efectivamente se estaban descargando mercancías no nacionalizadas descritas en las declaraciones de tránsito de la Aduana de Limón, números 510, 511 y 512 de fechas 14 y 17 de febrero de 1997, en la bodega número cuatro destinada e incorporada al régimen de Depósito General; ya que, el interesado acepta como un error de su representada, el que ocurriera tal descarga y recepción de mercancías en esa bodega, argumentando que el error se generó porque mantiene en el mismo lugar bodegas para el almacenamiento fiscal y el almacenamiento general.

El Tribunal estima que el recurrente puede considerar natural o complementario para el depositario, ofrecer a sus clientes los servicios integrados de almacenamiento fiscal y general; por cuanto están incorporados al giro comercial de la empresa; no obstante, cada régimen cuenta con una naturaleza, normativa, controles y consecuencias jurídicas para con el Estado y los particulares diferente, aspectos que debe tener presente el Depositario Aduanero en el ejercicio de sus funciones.

Las normas sustantivas y procesales que regulan la actividad del depósito fiscal y del depósito general se encuentran debidamente publicadas e individualizadas, siendo resorte de las autoridades aduaneras ejercer controles sobre las actividades y el ejercicio de funciones de los depositarios aduaneros, con lo cual, resulta ajustado a derecho las inspecciones ejecutadas por la División de Control y Fiscalización por estar incorporadas dentro de sus competencias.

b). Por otra parte debe señalarse que el artículo 236 inciso d) de la L.G.A. regula la conducta del auxiliar de la función pública aduanera cuando incumple las normas referentes a ubicación, estiba, depósito, seguridad, protección o identificación de mercancías dentro del recinto fiscal autorizado o habilitado por la Dirección General de Aduanas.

La norma refiere a aquellas mercancías que están en las áreas autorizadas dentro de los diez mil metros cuadrados para el régimen de depósito fiscal. Esta norma no se aplica al caso por cuanto se tiene por demostrado que la mercancía extranjera indicada en las declaraciones de tránsito número 510, 511 y 512 ingresaron a la bodega número cuatro del Depositario Cariari S.A., destinada al almacenamiento de mercancías nacionales o nacionalizadas.

c) Para la decisión del presente asunto se requiere analizar la conducta del Depositario Aduanero; ya que, a criterio del recurrente obedece a un error, mismo que lo exime de responsabilidad. En doctrina se ha definido el error para delimitar sus alcances y efectos como “...en lo jurídico se entiende por error el vicio del consentimiento originado por un falso juicio de buena fé, que en principio anula el acto cuando versa sobre el objeto la esencia del mismo. “ Los principales tipos de error que distingue la doctrina son los errores de hecho y de derecho, entendiendo por el primero: “El que versa sobre una situación real, el proveniente de un conocimiento imperfecto sobre las personas y las cosas; y acerca de si se ha producido, o no, un acontecimiento”; se entiende por error de derecho: “Por ignorancia de la ley o de la costumbre obligatoria. Y todo lo constituye el desconocimiento de la existencia de la norma, es decir, de la letra exacta de la ley, como de los efectos que de un principio legal o consuetudinario se deslucen.”

Aplicando todos los conceptos al caso, tenemos que al Almacén de Deposito Fiscal Cariari S.A. a través de sus representantes sí conocen la naturaleza jurídica de su negocio y los derechos y deberes que adquieren con la concesión de depositarios fiscales, situación que reconoce expresamente el señor Urbina al manifestar “Prueba de ello lo es nuestra trayectoria seria y responsable en esta actividad por tantos años y el apoyo de nuestros clientes.” (folio 74 exp.adm.), razón por la que no ocurre el fenómeno del error de hecho. Asimismo no estamos ante un error de derecho por cuanto la Ley General de Aduanas está declarada de orden público, teniendo la obligación los representantes legales del Depositario Fiscal, como auxiliares de la función pública, el conocerla y respetarla (Artículo 258 L.G.A.). Esta obligación tiene su soporte constitucional en el artículo 129 al señalar “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”, por ende no se admite como un error del almacenista el permitir la descarga de mercancía en lugar no habilitado como excusa de responsabilidad.

d) Descartado el error, es de relevancia al caso analizar si la conducta atribuida al Depositario, materializada por sus representantes legales, encuadra dentro del concepto de culpa, porque la misma puede ser reprochable y en consecuencia sancionable. Para ello es necesario tener presente que “ La indagación de la culpabilidad solamente puede ser fundamentada en la efectiva comisión de un hecho preciso y adecuado a una figura penal.” Respecto la aplicación de sanciones a las sociedades la Sala Constitucional ha dispuesto que “ La doctrina más importante en esta materia ha señalado que resulta constitucional y legalmente posible la aplicación de sanciones administrativas a las personas jurídicas, en el tanto y en el cuanto éstas pueden ser sujeto de la obligación tributaria y porque al carecer dichas sanciones de pena privativa de libertad, no debe estar presente el principio de la personalidad de la pena que deriva del principio de la culpabilidad. De modo que, cuando se trata de ilícitos que no establecen la cárcel como sanción, las personas jurídicas pueden ser sujetos activos de tales ilícitos administrativos. “( Sala Constitucional, sentencia número 5399-95 ).

En doctrina se define la culpa como el “ Descuido o desprecio de las precauciones más elementales para evitar un daño o impedir un mal”, que en el caso refiere a incumplir con obligaciones específicas para la recepción, descarga y depósito de mercancías dentro de las áreas habilitadas para depósito fiscal.

Por el término negligencia se ha definido “... omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo custodia de las cosas y en el cumplimiento de los deberes y misiones.”

El Depositario Aduanero por intermedio de sus representantes conocen su actividad y las leyes que la regulan, por ello no podía permitir el recibo, descarga y depósito de mercancía extranjera en lugar no habilitado o autorizado para esos efectos; ya que su función es custodiar y conservar temporalmente, con suspensión del pago de tributos, mercancías extranjeras objeto de comercio exterior dentro de las áreas habilitadas. (Ver artículos 46, 47 de la Ley General de Aduanas y 134 inciso e) y 136 del DE-25270-H). El depósito fiscal es el régimen aduanero por el cual las mercancías son depositadas temporalmente bajo custodia, conservación y responsabilidad de depositario y el control de la aduana, sin el pago de los tributos a la importación. La salida y entrega de las mercancías del depósito fiscal se efectuarán una vez cumplidas las formalidades exigibles y satisfechas las responsabilidades tributarias, conforme con el régimen aduanero aplicable ( art. 155 de L.G.A.). Como se puede apreciar el hecho atribuido al depositario fiscal está debidamente regulado y tipificado en la ley aduanera, considerando sancionable aquella conducta contraria al precepto normativo teniendo como consecuencia la sanción administrativa, que en el caso consiste en la suspensión del ejercicio de nuevas operaciones durante un período. Consecuentemente al haber demostrado la Administración la actuación negligente del depositario no son de recibo las manifestaciones del señor Urbina al solicitar se exima de responsabilidad a su representada.

e) Argumenta a su favor el depositario que fue el transportista quien incurrió en el error de almacenar mercancías en áreas no habilitadas. Sobre este extremo estima el Tribunal que no le asiste la razón puesto que las actividades de recepción, descarga, ubicación, traslado y otras que se realicen dentro del almacén fiscal o general son propias del depositario, y como tal debe responder ante la Administración.

f) No le asiste el derecho al recurrente de rebajar la sanción, porque el hecho no fue advertido y corregido por su propia iniciativa, sino que fue detectado primero por la División de Control y Fiscalización, por lo que no encuadra en el concepto de multa prescrito en los artículos 236 y 233 de la L.G.A. Por consiguiente la sanción administrativa impuesta por la Dirección General de Aduanas de suspender cinco días hábiles a partir del día siguientes a la firmeza de la resolución, al Almacén de Depósito Fiscal Cariari S.A., se ajusta a las normas sustantivas y procesales que rigen la materia y en concreto a lo ordenado por el numeral 238 inciso c) de la Ley General de Aduanas, que a la letra indica “ Será suspendido por cinco días hábiles del ejercicio de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la función pública aduanera que:...c) Incumpla la obligación de mantener mercancías únicamente en lugares habilitados o autorizados, si se trata de empresas, obligadas a ello.”

Por lo argumentado debe confirmarse en todos sus extremo el acto administrativo impugnado y rechazar el recurso de apelación interpuesto.

**POR TANTO:**

Se rechaza el recurso de apelación y se confirma la resolución recurrida. Se devuelven los antecedentes a la Dirección General de Aduanas para su ejecución. Téngase por agotada la vía administrativa.-

**Notifíquese** al Almacén de Deposito Fiscal Cariari S.A., en la oficina del Lic. Rafael Arturo Quirós B., Los Yoses, del Automercado 330 metros al Sur, cien metros al Oeste y veinticinco metros al norte, Bufete Quirós y Asociados y a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales.

Loretta Rodríguez Muñoz  
Presidenta

Alejandra Céspedes Zamora

Dick Rafael Reyes Vargas

Luis Alberto Gómez Sánchez

Shirley Contreras Briceño

Desiderio Soto Sequeira

Elizabeth Barrantes Coto